

C.A. de Santiago

Santiago, catorce de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

En estos autos Ingreso Corte 703-2023, comparece el abogado Jorge Gómez Edwards, en representación de Canal 13 SpA, interponiendo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34 de la ley 18.838, recurso de apelación en contra del Oficio N° 823, de 2 de noviembre de 2023, del Consejo Nacional de Televisión -CNTV-, que impuso a la casa televisiva una multa de 42 UTM por la emisión de una nota inserta en el programa “Tu Día” de 16 de marzo de 2023, en la que *“se exhiben elementos suficientes para determinar la identidad de menores de edad en estado de vulnerabilidad y de posible vulneración de sus derechos”*, lo que a juicio del organismo recurrido constituye una infracción al artículo 8°, inciso segundo, de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión (NGCET).

I.- Antecedentes de contexto:

Hace presente que el programa que dio lugar a la sanción que se reclama, abarcó una extensa cobertura en vivo de más de dos horas de duración sobre un procedimiento policial de allanamiento y detención de numerosas personas extranjeras en situación irregular, que habrían usurpado a su dueño una casa en la comuna de Estación Central; lugar en el que se encontraron armamentos, drogas, especies robadas y en el que se ejercía la prostitución. Precisa que el sitio en el que se produjo el allanamiento corresponde a una vivienda de gran tamaño que cruza la cuadra, modificada mediante un sinnúmero de construcciones irregulares, habitada por más de 80 personas. En ese mismo inmueble -afirma- en el pasado, se produjeron balaceras, ataques de bandas rivales, ruidos molestos nocturnos y constantes amenazas de violencia a los vecinos del sector, quienes habían efectuado cientos de denuncias.

Expone que, durante el programa transmitido en vivo, aparecieron en dos oportunidades, de improviso, dos menores de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

edad que accidentalmente se cruzaron por el lugar y fueron captados por breves momentos, en segundo plano, para salir de foco casi inmediatamente. Así, la aparición del primer menor tuvo lugar entre las 08:20:16 y 08:20:039, entre un sinnúmero de detectives que llevaban a cabo el operativo policial, en tanto que la del segundo aconteció entre las 10:02:19 y 10:02:48, también entre los efectivos de Investigaciones, procediendo el menor a cubrir su cara con su brazo. De esta manera, ambas apariciones fueron repentinas y duraron tan solo algunos segundos, poniendo de relieve que la cámara no los enfocó, los periodistas no se refirieron a ellos ni se entregó dato alguno a su respecto.

II.- Vicios de legalidad de la resolución recurrida:

a) El CNTV no se pronunció sobre el principal argumento de la defensa, relativo a la ausencia de dolo o culpa por caso fortuito. En efecto, alegó que las apariciones cuestionadas fueron completamente accidentales y sorprendidas, ocurriendo durante un despacho en vivo, que imposibilita editar el contenido, por lo que constituyeron un caso fortuito, imposible de prever o evitar, lo que excluiría el dolo y la culpa en su actuación.

El organismo fiscalizador omitió pronunciarse sobre este argumento, lo que constituye una vulneración del artículo 41, inciso primero, de la ley 19.880, que establece la obligación de los órganos administrativos de pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados en un procedimiento administrativo, lo que resulta particularmente relevante, desde que se ha exigido que el infractor actúe con dolo o al menos culpa para configurar la infracción, siendo inaplicable el criterio de responsabilidad objetiva;

b) Infracción al debido proceso, pues el CNTV se negó a recibir la causa a prueba, no obstante que en sus descargos controvirtió expresamente los hechos imputados y solicitó la apertura de un término probatorio para acreditar el caso fortuito alegado, petición que fue desechada bajo el argumento de que la concesionaria no había discutido los presupuestos fácticos del procedimiento ni cuestionado



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

los contenidos audiovisuales, estimándose, entonces, que aquello no se requería al tenor del artículo 34 de la ley 18.848. En consecuencia, se privó a su parte del derecho a presentar prueba propia o de obtenerla respecto de terceros con la finalidad de demostrar que la aparición de los menores fue imprevista y que las circunstancias del momento hacían imposible evitar su captación en cámara, considerando las directrices internas del canal y la dinámica de la situación en el lugar de los hechos, violándose así, la garantía constitucional del debido proceso establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República;

c) No se vulneró el artículo 8° de las NGCET, ya que no reveló ninguna información que condujera "inequívocamente" a la identidad de los menores, pues las apariciones fueron muy breves -23 y 29 segundos- y accidentales en segundo plano, sin que se haya mencionado algún dato personal de ellos ni de sus padres, así como tampoco, alguna referencia verbal a los mismos durante la transmisión. A pesar de lo expuesto, el CNTV rechazó este argumento, limitándose a afirmar que las imágenes son suficientes para establecer inequívocamente sus identidades, sin proporcionar ningún análisis fáctico o jurídico que respalde esta conclusión, agregando que la exhibición de planos directos del exterior e interior de la vivienda, y aspectos de su intimidad, tales como sus camas, juguetes y entorno donde viven, permitiría su identificación, fundamento que califica de falaz, puesto que la única imagen de juguetes mostrada -a las 09:45 horas- registra 3 juguetes sobre un colchón en el suelo, sin que exista ningún elemento que permita vincular estos objetos con los niños en cuestión.

Refuerza esta idea apoyándose en la definición de "inequívoco" de la Real Academia, que apunta a algo que "no admite duda o equivocación", lo que no se verifica en la especie, dado que, de acuerdo con lo ya expresado, caben todas las dudas posibles y equivocaciones respecto de la identidad de los menores;



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

d) Infracción al principio de proporcionalidad en la sanción impuesta, en atención a que el CNTV, reconociendo que el artículo 33 N° 2 de la ley 18.838 vulnera el principio de proporcionalidad, intentó remediar esta situación mediante la emisión de distintos reglamentos, tales como la Resolución Exenta N° 591, de 2020, sobre “Normas Generales para la determinación de la cuantía de las multas que debe aplicar el Consejo Nacional de Televisión” y la Resolución Exenta N° 610, de 2021, sobre “Adecuación de normas generales para la aplicación de la sanción de multa”, en la cual cambió radicalmente los criterios establecidos tan solo ocho meses atrás. De esta manera, la contraria no sólo invadió facultades legislativas, sino que, además, es vacilación en la determinación de criterios para graduar la gravedad y cuantía de las multas, lo que demuestra que la disposición legal no cumple con el estándar constitucional de proporcionalidad.

En segundo término, el organismo recurrido aplicó de manera incorrecta el reglamento contenido en la Resolución Exenta N° 610 de 2021, al considerar como reincidencia una sanción previa, que afectó a un bien jurídico diferente (artículo 6° de la norma reglamentaria).

Como tercer aspecto de este argumento, asevera que la autoridad incurrió en un error en el cómputo del plazo de reincidencia, al tomar en cuenta para ello la fecha de la sanción en lugar de la data de comisión del acto para calcular el plazo de 12 meses.

En un cuarto punto, reclama que se usó incorrectamente el criterio de cobertura nacional para establecer el monto de la multa, pues constituye solamente el límite superior de todo el rango legal, lo que es justamente el reproche que se ha declarado en tantas ocasiones por el Tribunal Constitucional.

Concluye que, en función de los argumentos vertidos, corresponde revocar la sanción impuesta o, en subsidio, rebajarla al mínimo, quedando de conformidad a lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 33 de la ley 18.838, en una simple amonestación;



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

e) Infracción al principio *non bis in ídem*, pues el mismo hecho, esto es, haber revelado la identidad de los menores, ha sido considerado tanto para imponer la sanción por infracción al artículo 8° de las NGCET como para agravar la pena bajo el criterio N° 1 de la Resolución Exenta N° 610, que se refiere a la “participación o presencia de niñas, niños o adolescentes sin la debida protección”, lo que transgrede el artículo 63 del Código Penal.

Termina solicitando se acoja el presente recurso, y se absuelva a su parte de la multa impuesta, con costas o, en subsidio, se rebaje la sanción al mínimo de amonestación -que contempla el artículo 33 N° 1 de la ley 18.838, u otra inferior a la impuesta, que prudencialmente estime procedente esta Corte o, también en subsidio, se rebaje la impuesta a la cantidad de 41 UTM por infracción al principio *non bis in ídem*.

Informó el Consejo Nacional de Televisión, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

I.- Antecedentes:

En sesión celebrada el día 23 de octubre de 2023 se sancionó a la concesionaria Canal 13 SpA por infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, según lo dispuesto por el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 1, 12 letra a), 33 y demás pertinentes de la ley 18.838, por la vía de la inobservancia de los artículos 8° de las NGCET, 19 N° 4 de la Carta Fundamental, y 3° y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Detalla que la vulneración de dichas normas tuvo lugar a raíz de la emisión de una nota inserta en el matinal, el día 16 de marzo de 2023, en la que se exhiben elementos suficientes para determinar la identidad de menores de edad en estado de vulnerabilidad y de posible vulneración de sus derechos.

En este contexto, el consejo consideró particularmente negligente la forma en que se abordó la situación al tener la certeza de que en la vivienda allanada se encontraban menores de edad,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

exhibiendo evidencia de la presencia de éstos, a pesar de lo cual, no se tomaron los resguardos necesarios para evitarlo. El recurrente no contravirtió los hechos ni aportó prueba suficiente para rebatir las imputaciones o eximirse de responsabilidad en sus descargos, limitándose a expresar una diferente apreciación de los hechos objeto de reproche.

Por ese motivo, se impuso a la concesionaria una sanción proporcional a la gravedad de los hechos, ascendente a 42 UTM, considerando los factores establecidos en la Resolución N° 610 de 2021, esto es, la gravedad de la infracción, la vulneración de derechos fundamentales de menores de edad, la emisión dentro del horario de protección, la cobertura nacional de la concesionaria y su reincidencia y, como atenuante, se atendió a que se informaba sobre un hecho de interés general, de forma tal que la sanción resulta coherente con numerosos casos confirmados por esta Corte.

II.- Sobre las ilegalidades denunciadas y su rechazo:

a) La resolución fue adoptada por el consejo apegándose a las competencias que le confieren la Constitución y la ley; con pleno respeto al principio de legalidad constitucional, específicamente, los artículos 19 N° 12 de la Carta Fundamental, y 1° y 12 de la ley 18.838.

b) El Acuerdo que impuso la sanción se encuentra debidamente fundado, pues junto con la descripción de los antecedentes de hecho, también hizo exposición detallada de los presupuestos normativos que consideró relevantes para la resolución del caso, no sólo en lo que concierne a las disposiciones de la ley 18.838, sino también a otras de fuente legal, constitucional y aquellas contenidas en tratados internacionales sobre Derechos Humanos que se encuentran vigentes, considerando el hecho de que la recurrente había infringido el principio constitucional del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, tomando como base los siguientes presupuestos:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

i.- En nuestra legislación se encuentra prohibido que los servicios de televisión entreguen antecedentes que permitan identificar a un menor de edad en situación de vulnerabilidad y/o de posible vulneración de sus derechos, pues tal exposición amaga sus derechos fundamentales, conforme dispone el artículo 8° de las NGCET.

ii.- La especial situación de vulnerabilidad de los niños exhibidos debido a su minoría de edad, su condición de migrantes, así como también, el contexto de violencia en el que están inmersos y condiciones de precariedad en las que viven; condiciones que fueron reconocidas por la emisora en su relato informativo, en el que destacó el hecho de que se trata de menores de edad que viven en situaciones socioeconómicas precarias, asociadas a la comisión de delitos y al tráfico de drogas y que por la situación en que viven, se encuentran en estado de riesgo.

iii.- En la emisión se evidencia que la concesionaria conocía sobre la presencia de menores de edad al interior del inmueble allanado y no tomó los resguardos necesarios para su debida protección, lo que revela su conducta negligente y permite descartar la existencia de un caso fortuito. Ello se desprendería de las declaraciones efectuadas por periodistas y la conductora del programa mientras se exhibía la nota, entre las cuales se citan las siguientes: *"(...) vimos incluso niñitos saliendo, que tienen que convivir día a día con este escenario, en este contexto, una lamentable situación"* (08:29:47 hrs.); *"Entre medio de esto hay muchos niños también y los niños convivían finalmente con estas mismas estructuras, que utilizaban para guardar el armamento y también la droga (...) o sea entremedio de las caletas donde fueron encontradas armas y drogas, hay juguetes de niños todavía tendidos (mientras se exhiben imágenes de juguetes al interior de una de las piezas de la casa). Recordemos las imágenes que vimos, que eran balaceras, en la entrada de esta casa y entremedio había niños"* (09:43:24 hrs); *"(...) Lo que a nosotros lo que más nos llama la*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

atención es que en medio de todo esto, que un nivel de violencia y de delincuencia, hay niños y la evidencia de eso es que te encuentras con coches, te encuentras con juguetes y es una situación súper lamentable". (09:44:17 hrs).

iv.- El programa entrega datos que, en su conjunto, permiten averiguar la identidad de menores de edad en situación de vulnerabilidad, pues si bien las imágenes transmitidas de ellos son breves, igualmente permiten su identificación, ya que se exhiben planos directos del exterior de la vivienda y de su interior, dando a conocer aspectos de su intimidad, como por ejemplo sus camas y juguetes, y el entorno de vulnerabilidad social en el que viven. El programa no se limitó a mostrar las imágenes de los niños, sino que entregó antecedentes del lugar donde viven, imágenes exteriores e interiores de la vivienda, datos de su ubicación en la comuna de Estación Central y su entorno barrial, de personas que habitaban el inmueble, de sus dormitorios; antecedentes que, en su conjunto, permiten inequívocamente su identificación para sus amigos, vecinos, familiares, comunidad escolar, etc.

v.- Se vulneraron los derechos fundamentales de los niños expuestos, referidos a su intimidad, privacidad e integridad psíquica, en tanto su individualización permite su reconocimiento por parte de terceros, quienes a partir de su exposición podrían conocer la situación que les afecta y el contexto de violencia e ilicitud en que se encuentran.

vi.- La opinión de que situaciones como la fiscalizada en este caso es contraria al artículo 8° de las NGCET es coherente con la jurisprudencia de previa de esta Corte, según pormenoriza.

c) Las alegaciones vertidas en el recurso no son idóneas para excluir la responsabilidad infraccional de la concesionaria, por los fundamentos que a continuación detalla:

i.- Canal 13 desconoce los alcances de la regla de atribución de responsabilidad de la ley 18.838. En efecto, la entidad se pronunció sobre los descargos del canal, aclarando que aquellos se centraron



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

en la naturaleza de las transmisiones en vivo, argumentando que no podía evitar la aparición sorpresiva de menores de edad y que la no repetición de dichas imágenes demostraba buena fe. Sin embargo, este argumento solo hace referencia a la previsibilidad de la conducta, lo que no exime su responsabilidad infraccional según el artículo 13 de la ley 18.838, que establece una regla de responsabilización por riesgo creado. Así, la emisora no explicó en qué consistía la supuesta imprevisibilidad ni qué le impidió prever la aparición de los menores y la entrega de información que permitía su identificación, lo que demuestra que no disponía de pruebas o argumentos para enervar los reproches formulados.

En este sentido, la ley 18.838 hace directamente responsable a los servicios de televisión de cualquier contenido que transmitan, estableciendo una responsabilidad por riesgo creado; criterio respaldado por diversos fallos del Tribunal Constitucional. Luego, el canal creó el riesgo reprobado por la infracción, elemento suficiente para dar por establecida su responsabilidad, sin que fuera necesario indagar sobre la intencionalidad de esta.

A mayor abundamiento, la exhibición de los menores de edad sin protección alguna, así como la entrega de antecedentes que permiten su identificación, sí era previsible, y obedece a una negligencia inexcusable de la concesionaria, aspecto que, fue ponderado en el curso del procedimiento, pues tenía conocimiento previo a la transmisión, de la presencia de menores en el interior del inmueble allanado, sin que tomara los resguardos necesarios para evitarlo.

A ello se suma que la infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión se caracteriza por ser de mera actividad y de peligro abstracto, por lo que para su consumación no es menester atender a elementos subjetivos como la intencionalidad.

ii.- El procedimiento administrativo ha sido respetuoso del debido proceso y del derecho a defensa de la concesionaria, ya que, durante su tramitación se tuvo pleno respeto de las normas que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

regulan el debido proceso, dando satisfacción a los principios de transparencia, publicidad, contradictoriedad, y demás requisitos que, en este ámbito, demanda el justo y racional procedimiento. En efecto, la reclamante fue debidamente notificada del procedimiento en su contra, se le informaron con claridad las conductas infraccionales imputadas y se le otorgó un plazo legal para presentar descargos y pruebas, satisfaciendo el principio de contradictoriedad establecido en el artículo 34 de la ley 18.838.

Respecto a la no apertura de un término probatorio especial, aclara que la concesionaria no controvertió los presupuestos fácticos del procedimiento ni los contenidos audiovisuales base del caso, limitando sus descargos a consideraciones jurídicas sobre la previsibilidad de la conducta, aspecto ya regulado por el artículo 13 de la ley, que por tanto reconducía a un problema de "tipicidad" y/o de interpretación de la normativa, aspecto en relación al cual debe regir la presunción de legalidad que ampara al informe de fiscalización, junto al principio de relevancia de la prueba; por ello, al no existir hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, el consejo ejerció su facultad discrecional de resolver sin más trámite.

Asegura que durante todo el procedimiento el canal tuvo la oportunidad de presentar pruebas conforme al artículo 10 de la ley, optando por no hacerlo.

Subraya que todas las resoluciones del procedimiento sancionador fueron debidamente motivadas, expresando los fundamentos de hecho y derecho que sustentaron el reproche y la sanción, y que Canal 13, como concesionaria de radiodifusión televisiva que utiliza el espectro radioeléctrico -bien nacional de uso público- debe cumplir con las cargas emanadas de la ley 18.838 y la Constitución, incluyendo el respeto a los derechos fundamentales en sus emisiones.

iii.- La concesionaria desconoce el régimen normativo infraccional en virtud del cual fue sancionada, al realizar una interpretación antojadiza del artículo 8° de las normas generales,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

pretendiendo restringir los alcances protectores de la disposición a la entrega de algunos antecedentes específicos de los menores de edad, como sus nombres, edad, sexo, nombre de sus padres o sus características, por ejemplo, lo que no se ajusta al tenor de dicho precepto ni a la interpretación consistente en la materia, conforme a la cual se reprende cualquier exposición en televisión de la identidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de manifiesta vulnerabilidad y que pueda redundar en daños a su bienestar, desarrollo e integridad física y psíquica.

iv.- El artículo 8° de las NGCET establece un deber de conducta cuya infracción es formal, puesto que las conductas sancionadas por la normativa administrativa que regula las emisiones de televisión se caracterizan por ser de mera actividad y de peligro abstracto, debido a la necesidad de precaver oportunamente las situaciones de riesgo que pudieran afectar a los menores de edad.

v.- El acto administrativo es respetuoso de la garantía del artículo 19 N° 12 de la Constitución, aspecto sobre el cual recuerda que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que está sujeto a responsabilidades ulteriores en todos aquellos casos en que se haga un ejercicio abusivo de ella. Por tanto, el consejo durante todo el procedimiento reconoció el carácter de interés general del tema que abordó la concesionaria, así como su derecho de exhibirlo al público.

vi.- La sanción se ajustó a la ley y al principio de proporcionalidad respecto a la determinación de la reincidencia en el quantum de la sanción, de manera que no existe ilegalidad en tomar como criterio válido -y de hecho es lo que exige la ley y el principio pro administrado- para considerar en la reincidencia la fecha en que quedó firme y ejecutoriada la sanción impuesta por el Consejo Nacional de Televisión, lo que además, se corresponde con los principios de contradictoriedad y publicidad asociados al debido proceso, pues esa es la forma y exigencia legal por medio de la cual



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

los actos administrativos que imponen sanciones pueden producir efectos.

Añade que los actos administrativos, como aquel que se impugna, quedan ejecutoriados desde su notificación, en armonía con el artículo 51, inciso segundo, de la ley 19.880, siendo el recurso judicial una reclamación de legalidad administrativa y no de apelación.

Sobre el plazo de doce meses para considerar la reincidencia, asevera que nada impide aplicar este plazo con un afán garantista, ya que el artículo 33 de la ley 18.838 no exhibe límite temporal para hacerlas valer y lo que importa es la condena realizada y no la mera ejecución de una acción sancionada.

Concluye que, en un afán respetuoso del principio de proporcionalidad, solo ha tomado en cuenta aquella sanción notificada al infractor hasta un año antes de las emisiones en cuestión, lo que, ciertamente, beneficia al recurrente y exhibe una racionalidad de las sanciones.

Recalca que se trata de una reincidencia en la misma infracción, pues la sanción tomada en cuenta fue aplicada por amagar precisamente derechos fundamentales.

vii.- El carácter agravado de la conducta por haberse transmitido los contenidos en horario de protección de los menores de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 letra I), inciso tercero, de la ley 18.838, incidió en la determinación de la entidad de la multa impuesta, según quedó consignado en el acuerdo respectivo.

viii.- Niega la infracción al principio del *non bis in ídem*, elucidando que, según se consigna en el basamento 30° de la resolución, sólo se aplicaron dos criterios de gravedad reglamentarios, la afectación de un derecho fundamental y el horario de la infracción, pues, aunque inicialmente el considerando menciona tres criterios, incluyendo la presencia de menores, el párrafo siguiente descarta específicamente este último por constituir la infracción misma. Por lo mismo, al concurrir dos criterios de gravedad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

reglamentarios y uno de tipo legal, la infracción se calificó de leve, aplicándose una multa inicial de 21 UTM, que posteriormente fue duplicada debido a la reincidencia.

ix.- La sanción ha respetado el principio de proporcionalidad, siendo fijada de acuerdo el artículo 33 de la ley 18.838, considerando la gravedad de la infracción, dado que se vulneraron los derechos fundamentales de menores de edad, afectando el principio del correcto funcionamiento de la televisión; sanción que se vio, además, agravada por tratarse de una concesionaria de alcance nacional, lo que amplifica el daño potencial.

Observa que según el N° 2 del citado artículo 33, la multa no puede ser inferior a 20 UTM, pero puede llegar hasta 1.000 UTM para concesionarios nacionales, duplicándose en caso de reincidencia hasta 2.000 UTM, así, en este caso, considerando la reincidencia de la concesionaria y su alcance nacional, se determinó la falta como leve y se impuso una sanción en el tramo mínimo, duplicada por reincidencia.

x.- La petición subsidiaria de aplicar una amonestación o rebajar la sanción resulta improcedente, dado que las Cortes de Apelaciones carecen de competencia para rebajar la multa, por tratarse de un recurso especial de reclamación de legalidad y no una apelación, lo que justifica que dichos tribunales cuenten con competencia para alterar la sanción impuesta sólo en caso de que se detecten ilegalidades en la tramitación o vicios de procedimiento que incidan en el principio de juridicidad, la fundamentación de la sanción o vulneraciones al debido proceso, lo que en la especie, no acontece.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que en atención a los cuestionamientos que plantea el arbitrio, parece procedente examinar los dos primeros que levanta la concesionaria y, que, en resumen, discurren sobre un mismo sustrato, que no es otro que la ausencia de un debido proceso



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

producto de la negativa del ente supervisor de recibir la causa a prueba.

2°.- Que, para emprender el examen propuesto, debe apuntarse que el artículo 27 inciso 4° de la ley 18.838 dispone *“Vencido el plazo para el traslado, con o sin la respuesta del asignatario, el Presidente del Consejo, de haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibirá la reclamación a prueba, la que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Vencido el término de prueba, háyanla o no rendido las partes, el Presidente del Consejo citará a sesión especial para que éste se pronuncie sobre la reclamación. Igual procedimiento se aplicará si la reclamación no se hubiese recibido a prueba. El Consejo deberá resolver dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del término probatorio”*, lo que cabe incardinar con el inciso 1° del artículo 34 de aquella ley que prevé *“El Consejo, antes de aplicar sanción alguna, deberá notificar a la concesionaria del o de los cargos que existen en su contra. Ésta tendrá el plazo de cinco días hábiles para formular sus descargos y solicitar un término de prueba para los efectos de acreditar los hechos en que funde su defensa. Vencido el plazo para el traslado, con o sin la respuesta del asignatario, el Presidente del Consejo, de haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibirá la reclamación a prueba, la que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil”*.

3°.- Que en este punto cabe relevar que es efectivo lo que indica el consejo relativo a que no existió controversia sobre la ocurrencia de la exhibición que se sanciona, empero, surge aquí la interrogante sobre si aquel aserto incluye la totalidad de las defensas del administrado, pues no debe olvidarse que parte de ellas se sustentaron en la ocurrencia de un caso fortuito. En efecto, se dijo por la apelante en sus descargos que los menores aparecieron de forma sorpresiva en las transmisiones, sólo en dos fragmentos, por no abarcaron más de seis o siete segundos, de un total de dos horas de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

transmisión. Así, aquel se extiende en el tipo y naturaleza de la programación en vivo, y en la circunstancia de que se mostró de manera absolutamente accidental a uno de los niños, por la espalda y a contraluz, y por lo mismo, no existió ninguna referencia a su persona o identidad, lo que también se produjo -según advierte- con el segundo menor, en que se capturó su imagen de manera accidental, azarosa, no propiciada por el periodista, considerando que el camarógrafo fijó la grabación sólo en ese profesional, sin dirigir la cámara al menor, ya que este se cruzó desde la espalda del periodista, a contraluz, con un brazo cubriendo su rostro. Afirma en consecuencia el arbitrio, que se trató de hechos imposibles de prever, lo que se demuestra -dice- con el breve espacio de tiempo que duró la exhibición y con el hecho de que se trataba de una transmisión en vivo, no editada, a lo que se suma el resguardo adoptado por los camarógrafos de no filmar directamente a niños, esto es, no dirigir la cámara hacia ellos. De esta manera, concluye el reclamante en sus descargos, los hechos reprochados fueron excepcionales, incidentales y ajenos a la voluntad de la concesionaria y por estos mismos antecedentes, solicitó la apertura de un término probatorio, para así poder exhibir las pruebas que sustentan su defensa, a lo que agregó en su alegato -sin discusión de la contraria- que los profesionales que se encontraban en terreno fueron previamente informados de que no quedaban menores en el lugar después del operativo policial.

4°.- Que así las cosas, resulta evidente que sí se cuestionó la razón o circunstancia que llevaron a la exhibición de los niños, su imprevisibilidad, es decir, la controversia se situó en la causalidad de la conducta y la sanción aplicada, lo que pasa justamente por elucidar asuntos de hechos que nada tenían que ver, como lo sostiene la reclamada, con la responsabilidad por el riesgo creado o con la intencionalidad de la conducta, pues la defensa de la concesionaria apunta, en definitiva, a la existencia de un caso fortuito, al tratarse de un hecho desconocido e imprevisto, incluso respecto del cual había



obtenido información previa de parte de las autoridades que daban cuenta de lo contrario, esto es, que los menores habían sido desalojados con antelación. Ergo, se hacía necesario recibir la causa a prueba, precisamente sobre de aquellos aspectos que la apelante debía demostrar.

5°.- Que, siguiendo en esta materia a la Corte Suprema, debe relevarse sobre el artículo 35 de la ley 19.880 y la procedencia de recibir prueba en el marco de un procedimiento sancionatorio *“más allá de la libertad probatoria, establece una verdadera garantía en favor del administrado, consistente en la posibilidad de cuestionar la efectividad o exactitud de los hechos propuestos por la Administración, con el sólo requisito de que éstos sean relevantes para la decisión.”* Por ello, los cuestionamientos que levanta el apelante, no son sólo apreciaciones de hechos indiscutidos, sino que conllevan elementos de facto que requieren demostración con el objeto de destruir la necesaria causalidad que exige la sanción administrativa.

En consecuencia, la mera afirmación del consejo, relativa a que en la especie no existen hechos controvertidos, desconociendo de este modo, los argumentos planteados por la concesionaria, para arribar luego a una conclusión que se limita al examen jurídico de los mismos, soslayando la controversia planteada y la obligación de recibirla a prueba, implica una decisión ilegal, por vulnerar la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, en particular el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que hace necesario acoger la presente reclamación, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 18.834, **se acoge** la reclamación interpuesta por Canal 13 SpA en contra de la Resolución del Consejo Nacional de Televisión que impuso una multa de 42 UTM, comunicada mediante Oficio N° 823 de 2023 y, conforme a lo razonado, se ordena al CNTV retrotraer el procedimiento administrativo sancionatorio al momento



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

de la evacuación de los descargos, debiendo recibir a prueba las defensas y alegaciones de Canal 13 SpA, por un término razonable, continuando la tramitación del mismo hasta la dictación del acto conclusivo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Contencioso-Administrativo N° 703-2023.

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada, por el ministro (s) señor Manuel Rodríguez Vega y el abogado integrante señor Waldo Parra Pizarro. No firma el abogado integrante señor Parra, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Ministro Suplente Manuel Esteban Rodríguez V. Santiago, catorce de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a catorce de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXRLXTWNXYX